

Roj: STSJ CV 21/2016 - ECLI:ES:TSJCV:2016:21  
Id Cendoj: 46250310012016100004  
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal  
Sede: Valencia  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1/2016  
Nº de Resolución: 5/2016  
Procedimiento: PENAL - JURADO  
Ponente: MARIA PIA CRISTINA CALDERON CUADRADO  
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
SALA DE LO CIVIL Y PENAL  
VALENCIA

NIG nº. 46250-31-1-2016-0000005

Rollo penal de apelación de sentencias Tribunal del Jurado nº. 000001/2016

Audiencia Provincial de Valencia. Causa nº. 4/2015 del Tribunal del Jurado

Juzgado de Instrucción nº. 5 de Valencia. Diligencias del Jurado nº. 1/2012

#### **SENTENCIA N° 5/2016**

Excma. Sra. Presidenta

Dª. María Pilar de la Oliva Marrades

Ilmos. Sres. Magistrados

D. José Francisco Ceres Montes

Dª. Mª Pía Calderón Cuadrado

En la Ciudad de Valencia, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha visto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia núm. 688/2015, de fecha 2 de octubre, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Urna. Audiencia Provincial de Valencia. La Sentencia apelada se dictó en la Causa núm. 4/2015, seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado y dimanante del Procedimiento de la Ley del Jurado núm. 1/2012, instruido por el Juzgado de Instrucción número Cinco de los de Valencia.

Han sido partes en el recurso, como recurrente, D. Anibal, acusado y condenado en la instancia, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Alberto López Segovia, y defendido por el Letrado D. Osear Fernández Castilla; y como parte recurrida, y por tanto en concepto de apelado, el Ministerio Fiscal en cuya representación ha intervenido el Ilmo. Sr. Fiscal D. Luis Sanz Marqués.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Mª Pía Calderón Cuadrado.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada de la Erna. Audiencia Provincial de Valencia Dª. Lucía Sanz Díaz, designada Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en la Causa del Tribunal del Jurado núm. 4/2015, dimanante de las Diligencias del Jurado núm. 1/2012, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de los de Valencia, se dictó la Sentencia núm. 688/2015, de fecha 2 de octubre, en la que se declararon probados según el veredicto del Jurado los siguientes hechos:

"1.- El acusado, Anibal , es mayor de edad, con D.N.I. NUM000 y posee antecedentes penales.

2.- El acusado Anibal es conocido con el apodo de " Sordo ".

3.- El día 19 de julio de 2012, sobre las 4 00 horas, Justiniano , en compañía de Maximino , acudió al Pub "Privilege", sito en la C/ Joaquín Costa de Valencia. En ese momento el local estaba cerrado al público. Tras abrir el propietario del mismo, Rodrigo , accedieron aquellos, junto con éste, a su interior.

4.- A los 15 minutos aproximadamente de llegar, acudió al pub el acusado Anibal , a quien el propietario del local permitió el acceso. Una vez dentro, el acusado se dirigió a Justiniano y le conminó a que le entregara un dinero que, según aquel, debía.

5.- Tras exigir el acusado Anibal a Justiniano que le entregara su teléfono móvil, aquel efectuó una llamada. La persona que atendió la llamada en el otro lado de la línea confirmó al acusado que Justiniano era el deudor.

6.- Tras la citada llamada de teléfono, el acusado Anibal intimidó a Justiniano propinándole una fuerte bofetada en la cara, sin que conste le causara lesión.

7.- El acusado Anibal exigió a Justiniano que le facilitase su número de teléfono móvil, a lo que éste, por el miedo que aquel le inspiraba, accedió.

9.- A las 19:52 h de la tarde de ese mismo día 19 de julio de 2012, el acusado Anibal volvió a llamar a Justiniano , exigiéndole quedar en su local al día siguiente para que le entregase 1.000 euros, diciéndole que si se la jugaba o le vacilaba le rompería todos los huesos del cuerpo.

10.- El acusado Anibal dijo a Justiniano para intimidarle que había escuchado que alguien iba a tocar a su hija o a ir a por su hija.

11.- El 20 de julio de 2012, a las 2:20 horas, Justiniano denunció los hechos en la comisaría de Policía.

12.- El día 20 de julio de 2012, sobre las 12:35 horas, tras prestar Justiniano declaración ampliatoria en las dependencias de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, y mientras aun se encontraba en estas dependencias, recibió una nueva llamada del acusado Anibal , recriminándole no haber acudido a la cita concertada para la entrega del dinero, a lo que Justiniano le manifestó que necesitaba más tiempo, por lo que el acusado le contestó que le llamaría más adelante para concertar una nueva cita para el cobro.

13.- Cuando la policía procedió a la detención del acusado Anibal , éste llevaba consigo, entre otros efectos, dos teléfonos móviles, siendo uno de ellos el numero NUM001 ."

Después de exponer los Fundamentos de Derecho que estimó procedentes, el Fallo de la sentencia fue del siguiente tenor:

"Que conforme al Veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado de la presente causa, debo condenar y condeno al acusado Anibal , como criminalmente responsables en concepto de autor, de:

1.- Un delito continuado de amenazas condicionales, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de prisión de dos años y dos meses, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la prohibición de aproximarse a Justiniano , a su domicilio o lugar de trabajo, a una distancia inferior a 300 metros, por tiempo de cinco años, así como de comunicarse con el mismo, por cualquier medio, por el indicado plazo; condenándole, asimismo, a que indemnice, por vía de responsabilidad civil, a Justiniano en la cantidad de tres mil euros (3000 €), más el interés legal procedente.

2.- Una falta de maltrato de obra, a la pena de cinco días de localización permanente.

Asimismo, se condena al acusado Anibal al pago de las costas procesales.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se impone, se abona al acusado todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa".

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia y por la representación procesal del acusado y allí condenado se interpuso recurso de apelación sobre la base de las alegaciones que a continuación y en parte se transcriben:

Primera.- "Por infracción de Precepto Constitucional, en base al artículo 5.4º de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de Julio del Poder Judicial y artículo 846 bis c) b) e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al alegar la

vulneración del Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española . (...)"

Segunda.- "Esta parte respeta el parecer de los miembros del Jurado, pero discrepa, en todos sus extremos. Consideramos, que es prueba de cargo insuficiente para fallar en el sentido que a ésta interesa. (...)"

Tercera.- "En cualquier caso, y en relación con lo anteriormente expuesto, es una máxima de nuestro sistema jurídico la aplicación del principio in dubio pro reo cuando, como en el presente caso, no se han obtenido las pruebas incriminatorias suficientes para certificar la tipicidad de unos hechos y la autoría de los mismos, y que opinamos no se ha valorado correctamente por el Jurado al verter su veredicto para motivar la meritada sentencia que se recurre en apelación. (...)"

En el suplico se pedía a la Sala:

"Que, habiendo por presentado este escrito con la copia que lo acompaña, se sirva admitirlo, tener por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra la Sentencia nº 688/15, de 2 de octubre de 2013, en el proceso referido, admitir la apelación en ambos efectos y emplaze a las partes ante la Sala de lo civil y penal de tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana, dando al recurso la oportuna tramitación. SUPlico A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA que dicte nueva sentencia por la que se estime el presente recurso".

TERCERO.- Tras la presentación de este escrito y por Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado de 12 de noviembre de 2015 se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación acordándose dar traslado a las partes para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 846 bis d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , impugnaran o interpusieran recurso supeditado al de apelación en el término de cinco días.

El Ministerio Fiscal presentó escrito, fechado el 20 de noviembre, registro de entrada el día 24, oponiéndose a la estimación del recurso e interesando la confirmación íntegra de la resolución recurrida. Los argumentos dados giraron básicamente en torno a la existencia de numerosas pruebas de cargo, lícitamente obtenidas y aportadas al proceso, pruebas que se consideran suficientes y razonables a los efectos de fundamentar la condena del acusado en los términos expuestos. Asimismo se indica que "las razones alegadas por el recurrente expresan su personal y particular valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral y su discrepancia con la realizada por el Tribunal del Jurado pero no acredita en modo alguno el motivo del recurso indicado".

Mediante Providencia de la Urna. Sra. Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado de fecha 28 de diciembre de 2015 se tuvo por interpuesta la impugnación al recurso de apelación y se acordó emplazar a las partes para que, dentro del término improrrogable de diez días, se personaran ante la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

CUARTO.- Remitidos los autos y recibidos en este Tribunal, por Diligencia de ordenación del Ilmo. Sr. Letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano jurisdiccional y de fecha 20 de enero de 2016 se turnó de ponencia, se determinó la composición de la Sala con arreglo a las normas de reparto correspondientes y se acordó devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial de Valencia a fin de que procediera a su foliado y a remitir la anotación en el Siraj.

Por su parte, en Diligencia de ordenación de 23 de febrero de este mismo año se tuvieron por subsanados los defectos mencionados y se señaló la celebración de la vista de apelación, con citación de las partes, para el día 19 de abril de 2016, a las 10.30 horas de su mañana, habiendo comparecido ante esta Sala todas las personadas con la representación y defensa referida.

En el acto de la vista del recurso por el abogado de la parte apelante se solicitó la estimación del recurso efectuando las alegaciones que estimó oportunas con remisión a su escrito y petición de absolución para su defendido. Por el Ministerio Fiscal se interesó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida al estimarla ajustada a derecho.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como ha quedado indicado, la apelación interpuesta se formula sobre la base de tres alegaciones. Una primera que se articula al amparo del artículo 846 bis c) letra b ) y e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se enuncia como infracción de precepto constitucional con base en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entenderse vulnerado "el Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española ". Una segunda sin encuadre legal alguno y con

fundamento en la insuficiencia de la prueba de cargo para fallar en sentido condenatorio. Y una tercera, de nuevo sin reflejo o referencia expresa en los motivos enumerados con carácter taxativo en el citado artículo 846 bis c), respecto de la inaplicación por el tribunal sentenciador del principio in dubio pro reo.

De lo expuesto se deduce con relativa facilidad que la pretensión impugnatoria se construye, en realidad, en torno a un único motivo, la presunción de inocencia. Y ello no solo por el silencio del recurrente al exponer las dos últimas alegaciones, que también, sino principalmente por la propia significación del derecho a la presunción de inocencia, derecho que incluye entre sus elementos definitorios la prueba de cargo y su suficiencia y que no deja de guardar una estrecha relación con el criterio valorativo favorable al acusado en los casos de nacimiento en el juzgador de una duda razonable. Se impone, en consecuencia, un tratamiento conjunto de los argumentos esgrimidos por el recurrente aunque, con carácter previo, la Sala entiende conveniente precisar lo siguiente:

1. El denominado recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado se regula en los artículos 846 bis a) a 846 bis f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En dichos preceptos se configura un recurso devolutivo de índole extraordinaria que, por su propia esencia, implica tanto un conocimiento por órgano distinto y en principio superior como una limitación legal de las facultades de impugnación de los recurrentes y, por consiguiente, de los poderes del juzgador ad quem.

2. La apelación dispuesta contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado no es un recurso ordinario que permita a las partes introducir una segunda instancia en el proceso. Con motivos legalmente tasados que prescinden de la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, "el cometido jurisdiccional de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia al conocer de este recurso es estrictamente jurídico y se limita a resolver sobre aquellos concretos motivos que delimitan su objeto, quedando fuera de su competencia el examen de cualesquiera otras cuestiones".

Interesa destacar entonces que cualquier alegación de parte que implique una reconsideración de los elementos fácticos de la sentencia de instancia ha de ser rechazada al estar vedado a este Tribunal actuar como órgano de doble grado. De ahí que la decisión del recurso haya de partir necesariamente de la relación de hechos probados que se contiene en la resolución impugnada, sin que le esté permitido al órgano ad quem realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en su día en el juicio oral.

Ha de adelantarse entonces que tales límites no han sido observados por la parte recurrente y no lo han sido desde el momento en que sus alegatos se dirigen a atacar el juicio fáctico contenido en la sentencia y que no es otro que el que resulta del realizado por el Jurado, dueño único del veredicto. Y el enunciado de su alegación segunda es buena muestra de ello: "Esta parte respeta el parecer de los miembros del Jurado, pero discrepa, en todos sus extremos".

3.- El recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado está sometido en su regulación legal a un cierto rigor formal que afecta al propio escrito de interposición. No podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que la actividad jurisdiccional que se desarrolla en los medios impugnación en general y en esta apelación en particular se dirige sobre un concreto objeto y que éste, afín y diferente al mismo tiempo del deducido inicialmente en el proceso penal y resuelto en la sentencia impugnada, se identifica con la pretensión impugnatoria que ha de formularse al interponer el recurso. Dicha pretensión se individualiza a través de un concreto petium, al que se refiere el artículo 846 bis f) de la LECrim y que puede incluir la devolución al órgano a quo, y una determinada causa de pedir, configurada en este caso por los específicos motivos aducidos para su fundamentación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 846 bis c) de la LECrim.

Por ello esta Sala, en Sentencia núm. 16/2003, advierte que "dada la existencia de motivos tasados, el escrito de interposición debe estar redactado con una técnica jurídica precisa y rigurosa, asimilable a la exigida por el artículo 874 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el escrito de interposición del recurso de casación, de modo que la inobservancia de la precisión requerida en la formulación y en la determinación del motivo, o de cada uno de los motivos en que el recurso se funde (lo que deberá hacerse, en este último caso, con la debida separación), podrá ser determinante de su desestimación por causa de inadmisión".

Con todo, también esta Sala ha venido declarando "que, aunque no se especifique correctamente en el enunciado el motivo o submotivo, o aunque no se observe en su posterior exposición la exactitud, precisión y separación debidas, en la medida en que del desarrollo argumental contenido en el escrito de interposición resulte posible conocer cuál es el concreto motivo legal en que el recurso se fundamenta, de modo que las demás partes puedan impugnarlo primero y debatir después sobre él, el tribunal podrá estar en disposición de resolver sobre la cuestión planteada como objeto del recurso".

Desde lo anterior, pues, debe atenderse al motivo -alegaciones- del recurso interpuesto por la representación procesal del condenado en la instancia. La razón es sencilla: pese a las deficiencias advertidas -silencio, con una única excepción, en cuanto a la letra del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustenta la impugnación y ataque dirigido sobre el juicio fáctico principalmente-, existen elementos suficientes para suplir la falta de adecuación del escrito de interposición a los requisitos establecidos en cuanto a la presentación de un medio impugnatorio de naturaleza extraordinaria.

SEGUNDO.- Como quiera que el recurrente conforma su pretensión con un único motivo, la vulneración de la presunción de inocencia, procede examinar conjuntamente las tres alegaciones formuladas comenzando por recordar la doctrina de la Sala al respecto, que lo es reiterada y desde luego conforme con la sostenida por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Es sabido, y así lo pone de manifiesto el propio recurrente con cita de diversas sentencias de aquellos órganos jurisdiccionales, que la presunción de inocencia sólo puede entenderse desvirtuada cuando en el proceso se ha practicado prueba válida de cargo, debiendo distinguirse entonces entre:

1. "El control de la existencia de medios de prueba que se han de haber practicado en el juicio oral, que puede hacerse por la Sala de lo Civil y Penal y por medio del motivo e) del artículo 846, bis, c). Ese control se refiere a la existencia de verdadera actividad probatoria y practicada precisamente en el acto oral, concentrado, con inmediación y con publicidad que es la vista del juicio oral".

Pues bien, dicho control en el caso presente conduce claramente a un resultado positivo: la prueba, no obstante la insuficiencia proclamada por el apelante y como a continuación se analizará, fue numerosa -interrogatorio del acusado, testificales diversas, grabaciones telefónicas y documental- y su práctica no careció de las garantías referidas.

2. "El control de que esa prueba se ha practicado con observancia de las normas constitucionales y legales que regulan la admisibilidad de los medios de prueba y su práctica, lo que ha de poder realizarse también y por el mismo motivo".

De nuevo el control expuesto ofrece un resultado positivo, máxime si se tiene en cuenta que el recurrente no denunció en los momentos procesales oportunos la infracción, en cualquier caso inexistente, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

3. "El control de que los medios de prueba que se practicaron fueron realmente de cargo para el acusado; esta expresión "de cargo" es usada en varias ocasiones en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (arts. 49 y 70.2), pero en el artículo 846, bis, c), apartado e ), se habla de "base razonable", si bien la determinación de que existió base razonable para la condena tiene que partir de que se practicaron efectivamente pruebas que resultaron de cargo, con lo que parece que estamos ante la distinción entre interpretación de los resultados probatorios y valoración de la prueba".

Tampoco este último control conduce a la Sala a entender vulnerada la presunción de inocencia. Si bien se mira, los defectos denunciados por el recurrente y a que antes se ha hecho mención cuestionan las distintas pruebas practicadas en juicio desde la perspectiva de su ulterior valoración por el tribunal del Jurado pues no se puede negar, tras el estudio de lo declarado por el acusado y los testigos -entre ellos el denunciante, la persona que presencié los hechos acaecidos en el pub Privilege y los distintos miembros de la policía- así como del contenido de la llamadas que se escucharon en el juicio oral, que unas y otras tienen la caracterización de pruebas de cargo y que las mismas fueron interpretadas desde la razonabilidad y en ausencia de arbitrariedad.

4. Y al hilo de esta última observación ha de recordarse que el principio in dubio pro reo, que igualmente se afirma infringido, no encuentra exacto amparo en el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución .

Es de observar, en efecto, que este precepto no incluye entre sus contenidos el control de la aplicación de este criterio valorativo favorable al acusado. Al menos no lo incluye en su totalidad pues, al margen de su aspecto normativo, dicho canon, que lo es de valoración de la prueba, queda fuera del derecho fundamental referido y también del ámbito de decisión del presente recurso de apelación cuya naturaleza extraordinaria hace que el tribunal a quien se ha atribuido su conocimiento carezca de facultades para revalorar la actividad probatoria practicada en la instancia y llegar a diferente conclusión de la alcanzada por los jurados. Solamente si se tratara de un error interpretativo tal que afectara a la propia existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona ( STS núm. 3862/2013, de 2 de julio , con cita de las SSTs "de 03-10-2001 , de 27-02-2004 , o de 20-12-2004, nº 1543/2004 ") podría abrirse al conocimiento por el órgano ad quem.

Y al respecto, deviene preciso avanzar e indicar que el tribunal del Jurado en ningún caso manifestó tener dudas sobre la participación en los hechos del condenado hoy recurrente.

TERCERO.- Desde los datos y consideraciones anteriores, el motivo -las alegaciones- deviene improsperable.

Como no podía ser de otra manera, la decisión de la Sala se apoya en la propia lectura del acta del veredicto, primero, y de la sentencia, después. Una lectura que fácilmente permite comprobar tres cosas: que en el proceso seguido contra D. Anibal hubo suficiente actividad probatoria, que ésta fue de cargo y que en su interpretación no se aprecia la comisión de errores que hicieran del relato fáctico una narración inverosímil, discrecional o arbitraria -ni en general ni con relación a "la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona" en particular-.

Desde luego, consta y es de ver en el acta del juicio y en la grabación audiovisual de sus sesiones que en dicho acto y entre otras se practicaron como pruebas de cargo, con inequívoca significación en tal sentido, las siguientes: (i) Declaraciones testificales del denunciante -D. Justiniano - y de la persona que estaba con él la madrugada del día 19 de julio de 2012 -D. Maximino -, que explicaron la entrada del acusado en el local, la conminación al pago, la exigencia de entrega del móvil, la llamada de teléfono, la bofetada en la cara, la intimación para facilitar el número de teléfono móvil o la salida del establecimiento muy asustados, (ii) Asimismo y ya solo del denunciante, que narró la posterior llamada telefónica donde se le advierte que debe entregar una cantidad de dinero y "que si se la jugaba o le vacilaba le rompería todos los huesos del cuerpo", (iii) Declaraciones de los miembros de la Policía que, entre otras cosas, confirmaron aquella llamada y señalaron que el acusado en el momento de la detención llevaba consigo dos teléfonos móviles siendo uno de ellos desde donde se hicieron las llamadas intimidantes; 3º) Conversaciones telefónicas grabadas donde se escucha, por ejemplo, te voy a romper todos los huesos o que alguien iba a ir a por su hija, (iv) Y la propia declaración del acusado reconociendo haber estado en el local, haber exigido al denunciante una cantidad de dinero que parece debía, haber hecho desde allí una llamada donde se le confirmó la condición de deudor, haberle "pedido" su número de teléfono e incluso haberle golpeado.

Por tanto, no es posible concluir que la presunción de inocencia quedara sin desvirtuar sobre la base, que es en definitiva la argumentación primera del recurrente, de la insuficiencia de la prueba de cargo. Se destruyó y así lo apreció el Jurado valorando la legalidad, suficiencia y el carácter claramente incriminatorio de la actividad probatoria antes descrita. De ella coligió -por siete votos contra dos- que el acusado "es culpable de intimidar de manera continuada a Justiniano".

Además y como ya se ha referido, de la lectura del veredicto y la sentencia no se desprende ni que el Tribunal del Jurado incurriera en error interpretativo de especial trascendencia al apreciar la prueba y realizar el correspondiente juicio deductivo ni que condenara a pesar de la presencia de dudas. Nada hace pensar, en efecto, que se apartara objetivamente del contenido de la prueba de cargo y que su apreciación se efectuara desde una arbitrariedad o falta de lógica o ignorando el aspecto normativo de la regla in dubio pro reo ( STS núm. 798/2013, de 28 de febrero ). Al contrario, todo conduce a entender que, respetados los cánones de suficiencia y razonabilidad necesarios para declarar probados determinados hechos desfavorables y no probados los de condición favorable, la pretensión última de la parte recurrente sea, como manifestó el Ministerio Fiscal, que esta Sala, re-valorando la prueba practicada, llegue a solución fáctica distinta o, al menos, dude y se incline por una "diferente alternativa". Y esto, es decir, la discrepancia en cuanto a la valoración de la prueba, fundamentalmente sobre lo ocurrido en el establecimiento donde sucedieron los hechos y respecto al autor de las llamadas, que es la principal queja, es algo que en un recurso extraordinario como el presente queda fuera de la competencia del tribunal ad quem.

Por consiguiente, el motivo y con él las alegaciones y el recurso deben ser desestimados.

CUARTO.- Aunque no se ha pedido formalmente por la parte apelada la condena en costas del recurrente, procede hacer un expreso pronunciamiento al respecto atendido lo prescrito en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este pronunciamiento estima la Sala que ha de ser la declaración de condena en costas de la apelación a la parte recurrente y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en tanto en cuanto desestimados todos los motivos del recurso.

## FALLO

No ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Anibal contra la Sentencia núm. 688/2015, de fecha 2 de octubre, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del

Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Urna. Audiencia Provincial de Valencia en la Causa núm. 4/2015, la cual se confirma íntegramente. Con la imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe preparar ante este mismo Tribunal, recurso de casación para ante el Tribunal Supremo, mediante escrito autorizado por abogado y procurador, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la última notificación, en los términos del artículo 847 y por los tramites de los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de su procedencia, con testimonio de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ